



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA

**PRIMERA SALA UNITARIA EN MATERIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA**

EXPEDIENTE NÚMERO SENTENCIA NÚMERO	FA/219/2022 019/2023
TIPO DE JUICIO	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEMANDANTE AUTORIDAD DEMANDADA	***** DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OTROS.
MAGISTRADA	SANDRA LUZ MIRANDA CHUEY
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	LUIS ALFONSO PUENTES MONTES

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a trece de junio de dos mil veintitrés.

VISTO. El estado que guardan los autos del expediente en que se actúa esta Primera Sala Unitaria en Materia Fiscal y Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en los términos previstos por los artículos 83, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza procede a resolver los autos que integran el expediente señalado al epígrafe, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza el día veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, ***** presentó demanda de Juicio Contencioso Administrativo en contra de la **Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ahora conocida como Dirección de Seguridad Pública**, de la **Coordinación de Jueces Calificadores de la**

Secretaría del Republicano Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, del Juez Calificador de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, y de la Tesorería del Municipio de Saltillo, Coahuila, reclamando la nulidad lisa y llana de la **infracción y/o multa que le fue impuesta, del recibo de pago con número de folio ***** de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós,** así como de los **documentos denominados “Boleta de detención”, “Boleta de ingreso” y “Actuaciones”,** y como consecuencia de lo anterior, solicita la **devolución del pago efectuado** con motivo de la sanción de la que fue objeto, formulando conceptos de anulación y ofreciendo pruebas de su intención, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, aplicando el principio de economía procesal.

Siendo aplicable la no reproducción de los conceptos de anulación, así como las pruebas, pues la falta de su transcripción no deja en estado de indefensión al demandante, en razón que son precisamente de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos. Sustentando lo expuesto, las siguientes jurisprudencias:

<<Época: Novena Época, Registro: 1007636, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo IV. Administrativa Segunda Parte - TCC Primera Sección – Administrativa, Materia(s): Administrativa, Tesis: 716, Página: 834. **AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL.** La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias que emitan al resolver los recursos de revisión fiscal los agravios hechos valer por el recurrente, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, pues en términos del artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, los mencionados recursos están sujetos a los trámites que

la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución fija para la revisión en amparo indirecto; de modo que si el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación, la falta de transcripción de los aludidos motivos de inconformidad no deja en estado de indefensión a quien recurre, puesto que son precisamente de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, amén de que para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos en los que se sustenta la sentencia recurrida conforme a los preceptos legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para combatirla.>>

<<Época: Novena Época, Registro: 16652, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.P.A. J/30, Página: 2789 **AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES**

COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN. La omisión de los Tribunales Colegiados de

Circuito de no transcribir en las sentencias los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es de ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes legitimadas se les corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados o la resolución recurrida conforme a los preceptos constitucionales y legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para combatirlos.>>

SEGUNDO. Recibido el escrito inicial de referencia, Oficialía de Partes de este Tribunal remitió la demanda y anexos descritos en el acuse con número de folio OP-1514-

2022 en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós a la Primera Sala en Materia Fiscal y Administrativa de este Tribunal, designándole el número de expediente FA/219/2022.

TERCERO. En auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós esta Sala Unitaria admitió a trámite la demanda, con fundamento en los artículos 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y 51 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En el mismo proveído, después que este Órgano Jurisdiccional se pronunció sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas de la intención de la parte actora, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, para que contestara la demanda en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

CUARTO. En fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós se notificó personalmente a la parte actora a través de persona autorizada para recibir notificaciones; y en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós a las autoridades demandadas mediante oficio.

QUINTO. Notificada la parte actora y emplazadas las autoridades demandadas, según las diligencias actuariales antes señaladas, la licenciada *****, en su carácter de Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, presentó escrito de contestación a la demanda en el buzón jurisdiccional de la Oficialía de Partes de este Tribunal, en

fecha cuatro de enero de dos mil veintitrés, la cual fue admitida el día diecinueve del mismo mes y año.

Por su parte, el licenciado *********, en su calidad de **Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila**, presentó ocurso de contestación recibido en fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la cual fue admitida en auto del día veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

Por su parte, el licenciado *********, en su calidad de **Director General de la Policía**, presentó escrito de contestación a la demanda en el buzón jurisdiccional de la Oficialía de Partes de este Tribunal, en fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la cual fue admitida el día treinta del mismo mes y año.

Por su parte, a la **Coordinación de Jueces Calificadores de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, le fue declarada la preclusión del derecho para producir su contestación a la demanda mediante auto del día treinta de enero de dos mil veintitrés.

SEXTO. En virtud de las contestaciones antes señaladas se concedió el plazo de quince días a la enjuiciante a efecto de que ampliara su demanda; en ese tenor, se determinó tener por precluido el derecho de la accionante al no haber producido ampliación de la demanda dentro del plazo otorgado para dicho efecto, mediante los acuerdos que se relacionan en seguida:

1. Respecto de la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo,**

Coahuila, mediante acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

2. Respecto de la **Tesorería Municipal de Saltillo, Coahuila**, mediante diverso acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.
3. Respecto de la **Dirección General de la Policía de Saltillo, Coahuila**, mediante acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés.

SÉPTIMO. La audiencia de desahogo de pruebas tuvo verificativo el día trece de abril de dos mil veintitrés, por lo que abierta la audiencia se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes dada su naturaleza jurídica, no obstante la incomparecencia de las mismas a pesar de estar legalmente notificados; haciéndose efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés, en el que se dejó establecido que la falta de asistencia de las partes no impedía su celebración, esto con fundamento en el artículo 81 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual quedó asentado en el acta que se levantó con motivo de dicha diligencia.

En dicha acta se concedió a las partes el plazo de cinco días para efecto de que formularan sus alegatos contados a partir del siguiente de la conclusión de la audiencia.

OCTAVO. En fecha veinticinco de abril de dos mil veintitrés se declaró la preclusión del derecho de las partes para presentar sus alegatos, al no haberlo hecho dentro del plazo concedido.

Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se tuvo la referida certificación con efectos de citación para Sentencia.

En ese sentido, una vez culminadas todas las etapas procesales y no habiendo actuación alguna pendiente por desahogar, de conformidad con el artículo 83 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por ser este el momento procesal oportuno para dictar la sentencia, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las sentencias que se dicten por este Órgano Jurisdiccional deberán suplir las deficiencias de la demanda, sin analizar cuestiones que no se hayan hecho valer, limitándose a los puntos de la litis planteada. Asimismo, no obstante, de que no necesitan formulismo alguno, las mismas contendrán:

- <<I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido según el prudente arbitrio del Tribunal;*
- II. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;*
- III. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconocieron o cuya nulidad se declarase, y*
- IV. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.>>*

SEGUNDO. La competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de esta Primera Sala Ordinaria para conocer el asunto que nos ocupa y dictar el presente fallo, deviene de lo dispuesto en los artículos 3, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, así como 1, 2, 83, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

TERCERO. La personalidad de las partes quedó debidamente acreditada.

Por lo que hace a *********, en el proveído de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, al interponer el juicio por sus propios derechos.

En cuanto a las autoridades demandadas, se tuvo por reconocida su personalidad en los siguientes términos:

A la licenciada *********, en su carácter de **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de la Ciudad de Saltillo, Coahuila**, en proveído de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

Al licenciado *********, en su calidad de **Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila**, en proveído de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

Por su parte, al licenciado *********, en su calidad de **Director General de la Policía**, en proveído de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés.

CUARTO. Previo al estudio de los agravios expresados por la enjuiciante, atendiendo a las técnicas jurídicas

procesales, es necesario analizar de forma preferente las causas de improcedencia de la acción y sobreseimiento del juicio contencioso administrativo que hagan valer las partes, así como las diversas que de oficio advierta este Tribunal al ser de orden público¹.

En la especie, la **Tesorería Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, manifestó que la boleta de pago emitida por dicha autoridad no constituye un acto impugnabile para efectos del juicio de nulidad, pues no se trata de una resolución definitiva, y no actuó como ordenadora, instructora o ejecutora, sino como recaudadora, lo que, si bien no esgrime como una causa de improcedencia, debe ser objeto de pronunciamiento.

En ese sentido, debe decirse que la boleta de pago controvertida, así como la participación de la **Tesorería Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, constituyen un

¹ Época: Novena Época, Registro: 194697, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 3/99, Página: 13. **IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.** De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

acto accesorio pues constituyen una consecuencia de la infracción que combate la parte actora, es decir, la validez del acto emitido por la mencionada Tesorería se encuentra estrechamente vinculada con la subsistencia del acto emitido por la Juez Calificador de la Secretaría del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, de donde se colige la necesidad de comparecencia e intervención en juicio de la ya referida Tesorería, pues las resultas del juicio que se resuelve pueden trascender a su ámbito competencial.

Por otra parte, el **Director General de la Policía**, al contestar a la demanda, solicita el sobreseimiento por las causales establecidas en los artículos 79 y 80 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sin embargo, no precisa la hipótesis a que pretende referirse, ni expone razonamiento alguno que soporte su dicho, por lo que se traducen en manifestaciones que no pueden ser analizadas por esta autoridad al ser genéricas.

QUINTO. De la demanda presentada por ***** y contestaciones hechas valer oportunamente por la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de la Ciudad de Saltillo, Coahuila**, el **Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila**, y el **Director General de la Policía**, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de anulación², se procede a fijar la litis en los siguientes términos:

² Época: Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando

Del curso inicial de demanda, se advierte que la parte actora impugna la **infracción y/o multa que le fue impuesta, del recibo de pago con número de folio ***** de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós**, así como de los **documentos denominados “Boleta de detención”, “Boleta de ingreso” y “Actuaciones”**, y como consecuencia de lo anterior, solicita la **devolución del pago efectuado** con motivo de la sanción de la que fue objeto, vertiendo los conceptos de anulación que estimó pertinentes en el escrito de mérito.

Los conceptos de anulación expuestos por la parte actora en síntesis son los siguientes, independientemente del estudio que de manera completa se realizó para pronunciar esta resolución:

Primer concepto de anulación

Del concepto de anulación en estudio se advierte que la parte actora aduce que no tuvo conocimiento de la multa, infracción o acto de autoridad por el cual se le arrestó, sin que le fuera notificado el acto o infracción supuestamente cometida.

Agrega que el acto combatido se encuentra indebidamente fundado y motivado, señalando que en el recibo de pago con número de folio ***** de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós se señala

precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

como concepto de aplicación de pago el artículo 67 del Reglamento de Tránsito y Transporte para el municipio de Saltillo, sin embargo, el concepto mencionado en el recibo es "INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS(sic) A BORDO DE UN VEHICULO, CONDUCTOR ACOMPAÑANTE O PASAJERO", lo que no corresponde con el precepto legal indicado.

Refiere que en ninguna parte de dicho ordenamiento se establece que se sancionará con días de salario mínimo, Unidades de Medida y Actualización, o arresto, agregando que se fijó el máximo de horas de arresto y una cantidad exageradamente elevada sin fundamento legal; aduce también que el artículo 46, fracción XXVII, inciso (L) sub inciso (1.34) no indica la forma en que se deba de tomar en cuenta la Unidad de Medida y Actualización, es decir, diaria, mensual o anual.

Señala la impetrante que el Código municipal para el Estado de Coahuila(sic) es contrario a la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila(sic), específicamente en su artículo 401, pues se está aplicando una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, en lugar de ochenta a cien, como indica el artículo 67 del Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila.

En otro argumento contenido en el mismo primer – y único – concepto de anulación, esgrime la demandante que el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza establece en su artículo 295, fracción VI, número 65, que la sanción por conducir en estado de ebriedad es por veinte días de salario mínimo, por lo que considera que es procedente impugnar los reglamentos señalados.

Por último, cita el artículo 401 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se establece que, tratándose de jornaleros, obreros o trabajadores, la multa no podrá exceder de un salario diario; así como el numeral 404 de la norma en mención, alegando respecto de este último numeral que no se respetó la garantía de audiencia.

Litis fijada, que esta Sala se constriñe a resolver conforme a derecho; cabe señalar que corresponde a la parte actora la carga probatoria de acreditar su dicho toda vez que, como se verifica de las constancias que integran el expediente que se resuelve y de la síntesis señalada en el presente considerando, los conceptos de anulación no constituyen una negativa lisa y llana, sino una negativa calificada, y por lo tanto, no se configura el supuesto de excepción contenido en el artículo 67 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza³.

³ Época: Décima Época, Registro: 2007895, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materia(s): Administrativa, Tesis: (III Región)4o.52 A (10a.), Página: 3001. **NEGATIVA LISA Y LLANA DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PUEDE CONSIDERARSE ASÍ LA QUE SE CONTRADICE CON LOS ANEXOS DE LA DEMANDA.** El artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece, entre otras cosas, que los actos y resoluciones emitidos por las autoridades administrativas gozan de la presunción de legalidad, a menos que el afectado por éstos niegue lisa y llanamente los hechos que los motivaron; de lo anterior se sigue que para estar en condiciones de averiguar si se actualiza la presunción legal referida, es necesario definir cuándo estamos en presencia de una negativa como la que se precisa en dicho numeral. Para ello, debe considerarse que una negativa lisa y llana -también conocida como simple, porque se trata de una mera negación de los hechos señalados por la autoridad- sí es capaz de arrojar la carga de la prueba en perjuicio de la contraparte, pues de lo contrario obligaría a quien la formula a demostrar hechos negativos; en cambio, cuando incluye cortapisas, explicaciones o justificaciones, no puede calificarse así, sino como calificada, toda vez que encierra la afirmación implícita de otros hechos, lo cual acontece cuando en la demanda en el juicio contencioso administrativo federal se expresa una negativa simple de los hechos que motivaron el acto o resolución impugnada, que se contradice con los anexos de aquélla, por incluirse en ellos algunos argumentos tendentes a evidenciar la legalidad de la conducta reprochada, pues, en esas condiciones, la negación respectiva

SEXTO.- No habiendo actuación alguna pendiente por desahogar, de conformidad con los artículos 83, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza siendo el momento procesal oportuno para dictar la sentencia, la Primera Sala Unitaria en Materia Fiscal y Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, procede a estudiar los conceptos de anulación plasmados por ***** en su demanda, así como lo expuesto por la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, el Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, y el Director General de la Policía**, en sus escritos de contestación a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada de manera pronta, completa e imparcial, sin que su estudio de forma conjunta o por grupos, en el orden propuesto o en uno diverso, depare perjuicio a los justiciables⁴.

En su **primer y único concepto de anulación** la parte actora esgrime una serie de alegaciones, las cuales serán analizadas de forma individual para una mejor comprensión de la litis que se resuelve.

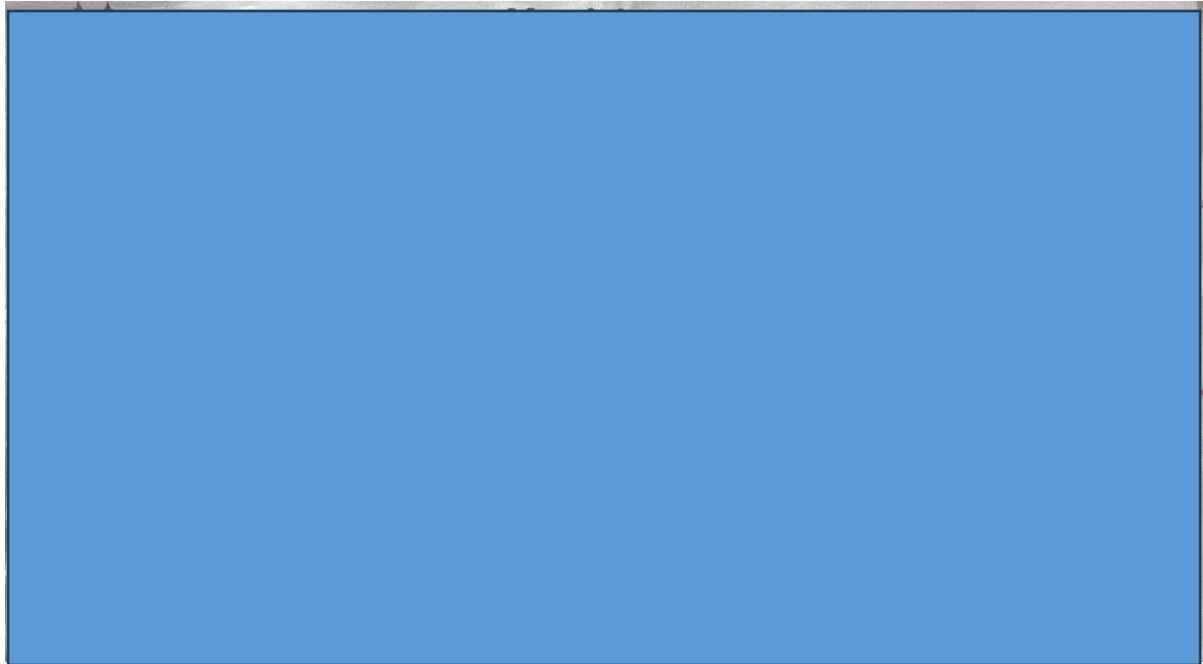
deberá considerarse como calificada. Es así, porque resulta de explorado derecho que la demanda y demás documentos que la acompañan, constituyen un todo que debe interpretarse integralmente, para desentrañar la verdadera intención del promovente; pensar lo contrario, implicaría desnaturalizar por completo la esencia del numeral 42 citado, en la medida en que, sin acreditarse la existencia de una auténtica negativa simple, podría arrojarse indebidamente la carga probatoria a la autoridad demandada.

⁴Época: Novena Época, Registro: 167961, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.C. J/304, Página: 1677. **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.** El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

En un primer momento, la impetrante dice desconocer el motivo por el cual fue detenida y sancionada. Refiere la accionante que tuvo conocimiento de la causa de la sanción que le fue aplicada a través del recibo de pago con número de folio *****, manifestando que en dicho instrumento <<Se señala como concepto de aplicación de pago por el artículo 67 del reglamento de tránsito y transporte para el municipio de Saltillo, sin embargo en el concepto se transcribe que es “INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS A BORDO DE UN VEHICULO, CONDUCTOR ACOMPAÑANTE O PASAJERO” LO CUAL NO ES EL CONCEPTO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67>>⁵(sic).

Sin embargo, de la simple lectura que se haga del recibo de pago con número de folio *****, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Tesorería Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se aprecia que en ninguna parte de éste se menciona lo reseñado por la actora, siendo que, en la descripción de pago se señala <<SANCIONES QUE CONTRAVENGAN REGLAMENTOS MUNICIPALES>>, como se verifica de la digitalización que en seguida se inserta del referido instrumento:

⁵ Foja 09 de autos.



De lo anterior se colige que, contrario a lo aseverado por la demandante, si tuvo conocimiento del motivo por el cual fue sancionada, tan es así que estuvo en posibilidad de formular alegaciones en su escrito de demanda respecto de la legalidad del acto impugnado.

Aunado a lo anterior, aun suponiendo el desconocimiento argüido por la pleiteante, es oportuno mencionar que la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, al oponer su contestación allegó los documentos correspondientes al acto administrativo, entre los que se destaca el instrumento denominado "CALIFICACIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA" de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se impone la sanción de la que fue objeto la interesada, con lo que se estima colmada la exigencia prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza⁶.

⁶ Foja 52 de autos

En seguida, se estudiarán los argumentos propuestos en los que se alega la violación a un debido proceso, legalidad y garantía de audiencia, mediante los cuales la parte actora pretende combatir la fundamentación y motivación del acto impugnado.

A fin de allanar el estudio del asunto que se dirime, es oportuno mencionar que la detención de la accionante, por conducto de los elementos de la Dirección de Policía, no fue objeto de concepto de anulación alguno en el escrito de demanda, sin que por otra parte se haya producido ampliación a la demanda, de donde se verifica que no se hizo valer motivo de disenso en torno a la detención y legalidad en que se practicó la misma, lo que se traduce en la imposibilidad de modificar dicho acto de autoridad de conformidad con el artículo 106, primer párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que dispone:

<<Artículo 106. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.>>

Por otra parte, debe decirse que la detención de la interesada para su posterior presentación ante la Juez Calificador constituye únicamente un acto de molestia, respecto del cual no resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 171/2019, en la que el Tribunal Pleno determinó:

*<<106. Dicho criterio, extendido al caso que nos ocupa, permite considerar que **cuando se detiene a una persona por conducir en estado de ebriedad y***

se le remite ante el órgano calificador respectivo, se está en presencia de un mero acto de molestia respecto del cual no rige lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.

107. Por tanto, **ese no constituye el momento idóneo para observar el derecho de audiencia previa**, máxime cuando no se está en presencia de un acto privativo (por no tener efectos definitivos) y que, si el presunto infractor efectivamente se encuentra bajo el influjo del alcohol en dosis superiores a las permitidas, no necesariamente se encuentra en aptitud de ser oído en los términos que tutelan el texto constitucional y los instrumentos internacionales con los que ya se ha dado cuenta.>> (Realce añadido)

No obstante, es importante mencionar que durante la detención de la parte actora se respetaron sus derechos, lo que se verifica del informe policial homologado con número de referencia ***** elaborado por ***** , en su calidad de Policía perteneciente a Tránsito Municipal de Saltillo, verificándose en la sección cuatro (4) "NARRATIVA DE LOS HECHOS", que se asentó, en lo que interesa, lo siguiente:

<< (...) motivo por el cual se presenta con el médico dictaminador en turno resultado el examen 0.199% abrió completo por lo cual se le hace saber al ciudadano el motivo de su supuesta falta administrativa siendo ebrio completo.

Procediendo a la lectura de sus derechos y posteriormente a su detención poniéndolo a disposición del juez calificador en turno (...).>>⁷ (sic) (Énfasis añadido)

En los términos relatados, se verifica que la agente que practicó la detención hizo la lectura de los derechos que le asisten a la ciudadana aquí demandante, y procedió a remitirla al Juez Calificador en turno, lo que además robustece que su actuación fue de carácter momentáneo, lo que se traduce en un acto de molestia al

⁷ Foja 47, reverso.

cual no le son exigibles las formalidades del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, tal como lo sostuvo el Alto Tribunal.

Aclarado lo anterior, se procede al estudio propiamente del acto impugnado consistente en la calificación de la falta administrativa contenida en el documento del mismo nombre, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós⁸, exhibido por la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, al contestar a la demanda.

Del instrumento en referencia se aprecia que, al tomarse la declaración de la Oficial *****, elemento que efectuó la detención de la aquí demandante, manifestó lo siguiente:

<<LA PERSONA ANTES MENCIONADA VENIA CONDUCIENDO UN VEHICULO DE MANERA IRREGULAR MOTIVO POR EL CUAL SE LE MARCA EL ALTO, Y AL ENTREVISTARME CON ESTE QUIEN ES CONDUCTOR DE UN VEHICULO DE MARCA *****, CON PLACAS DE CIRCULACION ***** DEL ESTADO DE COAHUILA, **MOTIVO POR EL CUAL SE LE INVITA A REALIZARSE EL EXAMEN DE ALCOHOLEMIA DANDO COMO RESULTADO 0.199% EBRIO COMPLETO, PONIENDO A DISPOSICION DEL JUEZ CALIFICADOR EN TURNO.**>> (sic) (Realce añadido)

Por su parte, la ciudadana *****, al hacer su declaración, manifestó lo siguiente:

<<iba conduciendo mi vehículo a dejar a mi amiga veníamos de plaza cocoa, **consumi bodka pase por el filtro me dictaminaron y me detuvieron si me informaron los grados de alcohol.** Manifiesto que me dedico a las ventas trabajo para IZZI tengo un ingreso de ***** pesos semanales tengo escolaridad de

⁸ Foja 52

licenciado en mercadotecnia y 00 personas dependen económicamente de mi.>> (sic) (Realce añadido)

De donde se obtiene que la parte actora sí fue enterada de la conducta por la cual estaba siendo sujeta a un procedimiento administrativo que derivó en la imposición de una sanción, así como que tuvo conocimiento y participó dentro de dicho procedimiento, máxime que firmó de enterada en el acto impugnado, quedando notificada del mismo, sin que por otra parte haya ofrecido medios de convicción para demostrar la coerción de la que dice haber sido objeto para plasmar la firma.

No pasa inadvertida la manifestación vertida en el hecho tercero del escrito de demanda, en la que en síntesis se expone que, si la demandante se encontraba en estado de ebriedad no era posible que estuviera jurídica y legalmente en aptitud de conformarse con el documento oficial por no encontrarse en “los 5 sentidos” (sic).

Sin embargo, sobre dicho tópico, debe decirse que tal como lo refiere la propia actora en su primer concepto de anulación, pasó tiempo entre el momento en que fue detenida y aquel en que efectivamente compareció ante la Juez Calificador para la determinación de la sanción, lo que de nueva cuenta se corrobora en el informe policial homologado *****, pues en el ANEXO A. DETENCIÓN(ES) (sic)⁹, en el apartado <<A.1 Fecha y hora de la detención>>, en el campo fecha se asentó “*****” sobre las iniciales “DDMMAAAA”, es decir, indicando el día mes y año de la detención; además, en el campo de hora se asentó “*****” en un formato de veinticuatro horas, esto

⁹ Foja 48

es, **la detención se efectuó a las tres horas con quince minutos** del día dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, **llevándose a cabo una vez concluido el dictamen de integridad física y prueba de alcohol en el aliento** mediante el equipo de marca “Drager”, mientras que la comparecencia de la aquí demandante ante la Juez Calificador se dio a las cuatro horas con cuarenta y cuatro minutos del mismo día, como se constata del acto impugnado.

Así, se verifica que **entre la hora de la detención y la presentación transcurrió una hora con veintinueve minutos**, asentándose la participación de la infractora sin registrarse incidencia alguna.

En ese mismo sentido, es relevante el documento denominado “**DICTAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA**”¹⁰ exhibido por la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, mismo que fue practicado por la Dictaminador Adscrito a la Coordinación de Jueces Calificadores y Médicos Dictaminadores de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, suscrito por la ciudadana *********, en cuyo encabezado se señala que cuenta con cédula profesional *********, dictamen de integridad física practicado a la ciudadana *********, en el que se indica en el apartado de prueba de estado de ebriedad o intoxicación clínica que contaba con aliento alcohólico, verborreico y pupilas vidriosas; además, procedió a utilizar un instrumento eléctrico de medición denominado alcoholímetro de la marca “Drager”, obteniendo como resultado el porcentaje marcado de cero punto ciento

¹⁰ Foja 50.

noventa y nueve por ciento (0.199%), teniendo como resultado y como comentario de la Médico Dictaminador el estado de ebriedad completa.

En seguida, se aprecia que el documento fue extendido a las tres horas con nueve minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Además, se exhibe el tiquete arrojado por el dispositivo en mención de marca "Dräger", al que le corresponde el número de "ALCOTEST" 6820, número de muestra 4523, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, a las tres horas con nueve minutos, en el que se dictamina a la ciudadana ***** , el porcentaje de cero punto ciento noventa y nueve por ciento (0.199%), firmado al final por la ciudadana ***** .

Siendo que a la demandante de nueva cuenta le fue practicado un dictamen de integridad física en la delegación oriente, en hora posterior al primer dictamen.

Esto se corrobora con el instrumento denominado "DICTAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA"¹¹ con folio personal ***** , número de examen médico 177157, indicándose en el apartado "Se aplicó exámen"(sic) la leyenda "*****." (sic), indicando la hora y fecha de emisión del dictamen que le fuera practicado a la actora por el Dictaminador Adscrito a la Coordinación de Jueces Calificadores y Médicos Dictaminadores de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ciudadano ***** , con cédula profesional ***** , en el que en el apartado de intoxicaciones no hizo anotación alguna, ni registró síntomas en la prueba de

¹¹ Foja 51

estado de ebriedad o intoxicación clínica, señalando de nueva cuenta el porcentaje de alcohol en sangre arrojado por el instrumento de marca "Dräger"; únicamente asentado que la examinada negó antecedentes de alergias a medicamentos, enfermedades crónicas degenerativas, cursar tratamiento médico alguno, sin lograr identificar datos de enfermedad respiratoria.

Así, se concluye que entre el primer examen médico practicado a las tres horas con nueve minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, y el segundo, practicado a las cuatro horas con treinta minutos del mismo día, transcurrió una hora con treinta y cinco minutos.

En las relatadas condiciones, se advierte que medió un tiempo prudente para mitigar los efectos del alcohol en sangre de la ciudadana *********, lo que fue constatado por el último dictaminador ciudadano *********, quien al hacer el segundo dictamen de integridad física no detectó ni registró síntomas al practicar la prueba de estado de ebriedad o intoxicación clínica.

Lo anterior permite constatar que la intervención de la ciudadana *********, cumple con los parámetros para tener por cumplido el derecho de audiencia previa ante el Juez Calificador, siendo oportuno recurrir de nueva cuenta a la Contradicción de Tesis 171/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sobre el tópico en cuestión señala:

<<103. En consecuencia, cuando al presunto infractor se le haya detenido por la autoridad competente con motivo de conducir bajo el influjo de alcohol, se le debe otorgar la posibilidad de ser oído, en el momento oportuno, a fin de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la comisión o no

de la infracción atribuida y de forma previa a que se le imponga la sanción de arresto administrativo.

104. Ahora bien, **a fin de que el presente criterio se encuentre bien delimitado y no sea utilizado como un incentivo perverso para eludir la sanción aplicable para aquellas personas que sí cometen la infracción** en estudio, conviene hacer referencia a las etapas que, en general, rigen la detención administrativa derivada de no superar la prueba del “alcoholímetro”, la remisión del presunto infractor ante el juez cívico o calificador en materia administrativa, así como **lo que esta Suprema Corte identifica como un “momento oportuno” para que sea conferido el derecho de audiencia previa al presunto infractor.**

(...)

109. Ahora bien, **cuando el presunto infractor ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador derivado de la infracción en estudio, debe verificarse si está en condiciones o no para comparecer ante el juez calificador. Si no es así, el presunto infractor debe quedar en resguardo de la autoridad administrativa hasta en tanto se recupere, esto es, cuando ya se encuentra en condiciones normales y sea consciente de su actuar.**

110. Por el contrario, **si el presunto infractor sí está en condiciones de comparecer ante el órgano calificador, entonces así se debe proceder a fin de determinar si efectivamente incurrió en una infracción** y, de ser el caso, individualizar la sanción aplicable que, en el caso sujeto a estudio, consiste en el arresto administrativo.

111. **En ambos casos, bien sea porque el presunto infractor ya se recuperó o porque desde que llegó a las instalaciones correspondientes se encontraba en condiciones de comparecer ante el órgano calificador, su presencia ante este último tiene la finalidad de determinar si efectivamente cometió la infracción atribuida y, de ser así, entonces imponer la sanción correspondiente.**

112. Luego, válidamente se puede afirmar que esa etapa es el momento idóneo para que se observe el derecho de audiencia previa, pues precisamente el arresto que, de ser procedente, se pretenda imponer como sanción, constituiría un acto privativo, al tener efectos definitivos sobre la libertad personal ambulatoria y corresponder a la consecuencia de la transgresión normativa conducente.

113. Por tanto, es en dicha etapa cuando al presunto infractor se le debe reconocer la oportunidad de ser oído y alegar lo que a su derecho convenga. Si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo. Por el contrario, si se constata la comisión de la infracción, entonces procede que se le individualice el tiempo que deberá purgar por concepto de arresto administrativo, en términos del artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Federal y de la normativa administrativa aplicable.>> (Énfasis añadido)

Continúa la accionante narrando que la autoridad demandada no fundó ni motivo la imposición de la sanción máxima en “salarios mínimos y/o horas de arresto” (sic), sostiene que el artículo 46, fracción XXVII, inciso L, sub inciso 1.34, establece una cantidad de ochenta (80) a cien (100) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, sin establecer si se trata de valor diario, mensual o anual, además de que se le impuso una multa de doscientas (200) veces el valor de la referida unidad.

Dentro de las manifestaciones sobre dicho tema, la accionante menciona que en el recibo de pago oficial con folio ***** se indicó la aplicación del artículo 67 del Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y el concepto de la infracción, sin embargo, como se precisó en líneas que anteceden, el recibo de pago en cuestión no contiene los datos referenciados por la interesada, por lo que su manifestación no resulta atendible para dilucidar el argumento indicado en el párrafo que antecede; misma suerte que sigue la cita del artículo 33 del Reglamento para los Establecimientos que Expenden o Sirven Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Saltillo, pues ni del recibo de pago, ni de la Calificación de Falta Administrativa se advierte que la **Juez Calificador del Republicano**

Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, se haya sustentado en el precepto legal en cuestión.

Aclarado lo anterior, sobre el motivo de disenso en estudio, debe decirse que la accionante parte de una premisa falsa al considerar que se le impuso una multa excesiva de manera carente de fundamentación y motivación.

Lo anterior se afirma así toda vez que, la impetrante no desvirtuó la comisión de la conducta infractora, lo que condujo a la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, a la imposición de la sanción correspondiente, apreciándose de los resultandos segundo y cuarto, y resolutive segundo, del instrumento "CALIFICACION DE FALTA ADMINISTRATIVA" de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, que la multa se sustentó en el artículo **46, fracción XXVII, inciso I), punto 1.21, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, norma que en el ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022) correspondiente al año en que se cometió la infracción, establece lo que en seguida se transcribe:

<<ARTÍCULO 46.- Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales se efectuará en la Tesorería Municipal conforme a la **cantidad equivalente en pesos que corresponda a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) multiplicado por el número de veces que se señale en cada uno de los conceptos** que se detallan:

(...)

XXVII. Por sanciones que contravengan los Reglamentos Municipales:

(...)

I) Sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; detectadas por agentes de tránsito, inspectores de transporte urbano público y/o dispositivos

electrónicos ya sean cinemómetros, radares y/o similares.

INFRACCIÓN	ARTÍCULO INFRINGIDO	SANCIÓN EN CANTIDAD DE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)
(...)	(...)	(...)
1.21. En estado de ebriedad completa o bajo el efecto de enervantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas.	67	de 160 a 200

>> (Realce añadido)

Lo anterior es útil para demostrar que, por una parte, la autoridad se sustentó en el punto 1.21 del dispositivo legal invocado, mientras que la demandante de forma errónea se refiere al punto 1.34, que constituye un supuesto diverso con una multa distinta; y, por otra parte, para acreditar que el propio dispositivo legal señala que la multa corresponderá al valor de la Unidad de Medida y Actualización multiplicada por el número de veces indicado en cada concepto, por lo que no es necesario indicar si se trata de un valor diario, mensual o anualizado, al precisarse la forma en que debe realizarse el cálculo correspondiente.

Amén de lo anterior, debe mencionarse que en el recibo de pago oficial 0***** A emitido por la Tesorería Municipal de Saltillo, se ampara la cantidad a pagar de ***** (\$*****); asimismo, es relevante mencionar que el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año dos mil veintidós fue de **noventa y seis pesos con veintidós centavos en moneda nacional (\$96.22)**¹².

¹² Consultado en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

Con la información antes mencionada es posible ilustrar el monto mínimo a cubrir establecido en el artículo **46, fracción XXVII, inciso I), punto 1.21, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, esto es, el equivalente a ciento sesenta (160) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, como se ilustran en seguida:

Monto mínimo en Unidades de Medida y Actualización	Operación aritmética	Valor Unidad de Medida y Actualización 2022	Resultado
160	Multiplicación (x)	96.22	*****

De lo anterior se aprecia que a la parte actora le fue aplicada una multa por la cantidad mínima prevista en el artículo **46, fracción XXVII, inciso I), punto 1.21, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, por lo que la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, no se encontraba obligada a motivar la imposición de la multa.

Es operante la jurisprudencia temática aplicable por identidad en las razones que informa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de tesis 2a./J. 127/99, visible en página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, del mes de diciembre de 1999, Novena Época, de rubro y texto del siguiente tenor:

<<MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no

causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.>>

La jurisprudencia proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable con el número de tesis VIII.2o. J/21, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 700, Novena Época, de la siguiente literalidad:

<<MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA.

No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la

imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.>>

Así como la emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable con el número de tesis XIII.2o. J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, página 1010, Novena Época, que se transcribe:

<<MULTA MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO VIOLA GARANTÍAS.

Cuando la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer la multa mínima contemplada en la ley tributaria aplicable, ello determina que el incumplimiento de los elementos para la individualización de esa sanción pecuniaria, como lo son: la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, etcétera, resulte irrelevante y no cause violación de garantías que amerite la concesión del amparo, toda vez que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una menor a ésta.>>

Respecto de la determinación de horas de arresto, es oportuno remitirse al resultando tercero del acto impugnado, que en lo que interesa dispone:

<<(…) así mismo se sanciona al ahora detenido con un arresto corporal de 36 horas en las celdas de esta Dirección de Seguridad Pública Municipal, las cuales podrán ser conmutables por el pago de una multa

*consistente en que consiste en un arresto corporal de hasta por 36 horas en las instalaciones de esta Delegación conmutables por el pago de una multa consistente en 160 Unidades de Medida y Actualización equivalentes a \$ ***** (***** 20/100 MX). Sanción fundamentada en el ARTICULO 46 FRACCION XXVII INCISO I) 1.21 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SALTILLO. **lo anterior ya es de conocimiento general que el consumo de alcoholen exceso puede producir perturbaciones temporales en la salud de las personas, lo cual constituye un riesgo para la integridad física del propio conductor, sus acompañantes, así como de la población en general.**>> (sic) (Realce añadido)*

De la transcripción anterior se verifica que el auto impugnado si contiene fundamentación y motivación de la sanción impuesta, sin que esta autoridad pueda pronunciarse en torno a su suficiencia toda vez que no fue controvertida por la parte actora, debiendo recordarse que fue omisa en producir ampliación a la demanda, y por tanto, no esgrimió argumentos impugnatorios sobre dicho tópico, cobrando vigencia el artículo 106, primer párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza ya transcrito en la presente sentencia.

De tal suerte, si el concepto de anulación se sustenta en una premisa falsa debe considerarse como inoperante, cobrando vigencia la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de tesis 2a./J. 108/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1326, Décima Época, de título y contenido siguientes:

<<AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.

Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.>>

Abona a la inoperancia del motivo de disenso el hecho de que el arresto corporal no se haya materializado, pues como se verifica de autos, la impetrante realizó el pago de la multa mínima impuesta; sin perder de vista que el tiempo que la impetrante estuvo a disposición de la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, no constituye un arresto, sino que se encontraba bajo su resguardo hasta en tanto estuviera en condiciones de intervenir en el procedimiento en el que se le atribuyó la falta administrativa sancionada.

En otra porción del concepto de anulación esgrimido en el escrito de demanda, se advierte que la pleiteante refiere que el Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el “reglamento de policía bando y gobierno para el municipio”(sic), así como el reglamento para los establecimientos que expiden o sirven bebidas alcohólicas en el municipio de saltillo(sic), son contrarios a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que – según su dicho – constituye una violación a los artículos 115, fracción II, y 133 de la Constitución Federal. Agrega que la ley de ingresos(sic) y el reglamento de tránsito(sic) son contradictorios con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que considera que es procedente impugnar los reglamentos a que se refiere.

A dicho respecto debe decirse en primer orden que los reglamentos no pueden ser objeto de impugnación en

el juicio de nulidad al existir prohibición expresa en dicho sentido, según se verifica de una interpretación en sentido contrario del artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, que establece:

<<Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios o recursos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;>>

En segundo orden, las manifestaciones vertidas no constituyen un auténtico razonamiento susceptible de ser analizado puesto que no se desprende la confrontación de la situación de hecho contra la norma de derecho, y la conclusión a que pretende arribar la parte justiciable, deducida del enlace entre uno y otro, mediante cuya relación se tienda a denotar la ilegalidad del acto controvertido.

Así, la omisión de la pleiteante se traduce en la inoperancia del motivo de disenso correspondiente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable con el número de tesis (V Región) 2o. J/1 (10a.), visible en página 1683, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, del mes de Septiembre de 2015, Tomo III, Décima Época, de rubro y texto siguientes:

<<CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO

COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.

De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, **trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento** (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), **se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento)**. Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, **una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento** y, por ende, **debe calificarse como inoperante**; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que

evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.>> (Énfasis añadido)

La jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable con el número de tesis 1a./J. 81/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, Novena Época, de título y texto siguientes:

<<CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.

El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello **de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento**, pues es obvio que **a ellos corresponde** (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) **exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren**. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.>> (Realce añadido)

La jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable con el número

de tesis VI. 2o. J/44, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, página 664, Octava Época, de rubro y cuerpo siguientes:

<<AGRAVIOS, NO LO SON LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS.

Las simples manifestaciones vagas e imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; si no que es necesario precisar qué razonamientos del a quo se estiman incorrectos, en qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia.>>

Así como la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable con el número de tesis I.4o.C. J/27, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2362, Novena Época, de título y contenido siguientes:

<<CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CARGA PROCESAL MÍNIMA DEL QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO).

Los conceptos de violación deben consistir, en su mejor expresión, en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez constitucional de los actos reclamados, total o parcialmente. Los **elementos** propios de estos argumentos deben ser, ordinariamente, los **de cualquier razonamiento**, esto es, **la precisión de o las partes del acto reclamado contra las que se dirigen; las disposiciones o principios jurídicos que se estiman contravenidos**, y los **elementos suficientes para demostrar racionalmente la infracción alegada**. Sin embargo, con el ánimo de optimizar el goce del

derecho constitucional a la jurisdicción, conocido en otros países como la garantía de acceso efectivo a la justicia, los criterios de tribunales federales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con la inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de pedir, aunada a la manifestación, sencilla y natural, de la afectación al ámbito personal, patrimonial, familiar, laboral, etcétera, sufrida por la peticionaria de garantías, desde su punto de vista y mediante el uso de lenguaje directo y llano, con el propósito evidente de abandonar las exigencias técnicas extremas a las que se había llegado, que sólo los abogados con suficiente experiencia en cada materia jurídica podían satisfacer, con la consecuencia, no intencional pero real, de alejar cada vez más a la generalidad de la población de la posibilidad de obtener la protección de la justicia, a través de la apreciación e interpretación del derecho. No obstante, ni la legislación ni la jurisprudencia se han orientado absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, hacia una revisión oficiosa de los actos reclamados, respecto a su constitucionalidad y legalidad, sino que **prevalece una carga procesal mínima para el agraviado, consistente en precisar en la demanda la causa petendi de su solicitud de amparo y la afectación que estime lesiva en su perjuicio.** En consecuencia, **cuando los peticionarios de la protección constitucional no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe declararse inoperante.**>>(sic) (Énfasis adicionado)

No se soslaya que la impetrante aduce que, en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 295, fracción VI, número sesenta y cinco (65), se establece una sanción pecuniaria inferior a la aplicada, correspondiente a veinte (20) días de salario mínimo, sin embargo, pierde de vista que el acto de autoridad que le causa perjuicio fue sustentado en el Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, aplicando directamente las sanciones previstas en dicho cuerpo

normativo, el cual es de considerarse aplicable en la especie por regular el tránsito de vehículos en la vía pública del Municipio de Saltillo, lo que se corrobora del artículo 1 de la norma reglamentaria en cuestión, que reza:

*<<Artículo 1. El presente reglamento es de orden público y **establece las normas a las que deberá sujetarse el tránsito de peatones y vehículos en la vía pública del Municipio de Saltillo**; así como las que regulan los actos, formas, requisitos y procedimientos para el servicio de transporte en el orden municipal de su competencia, conforme al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones legales aplicables.>>*

Es importante mencionar que, no es dable sostener de forma dogmática que un reglamento derivado de una ley, ambos de carácter estatal, se encuentran por encima de un reglamento de carácter municipal, pues tal aseveración es contraria a la autonomía municipal consagrada en el artículo 115, fracción II, de la Constitución General.

Sobre dicho tópico es oportuno recurrir a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la **Controversia Constitucional 14/2001**, esto es, la identificada con el número de tesis P./J. 132/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2069, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

<<MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA.

*A raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera competencial de los Municipios en lo relativo a su facultad reglamentaria en los temas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de aquélla, **los Ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas***

reglamentarias: a) el reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona similarmente a los derivados de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y de los expedidos por los Gobernadores de los Estados, en los cuales la extensión normativa y su capacidad de innovación está limitada, pues el principio de subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenore y en las que encuentre su justificación y medida; y b) los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 constitucional, que tienen una mayor extensión normativa, ya que los Municipios, respetando las bases generales establecidas por las legislaturas, pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias, lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a su organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la relación con sus gobernados, atendiendo a las características sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras, pues los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos -lo cual se logra con la emisión de las bases generales que emite la Legislatura del Estado-, pero tienen el derecho, derivado de la Constitución Federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, extremo que se consigue a través de la facultad normativa exclusiva que les confiere la citada fracción II.>> (Énfasis añadido)

Lo que cobra relevancia considerando que por mandato constitucional, específicamente por el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública, policía preventiva y tránsito, son funciones a cargo de los municipios, por lo que su reglamentación corresponde a estos, siendo aplicable los reglamentos estatales únicamente en caso de que los municipios no cuenten con normatividad propia vigente, de ahí que no se surta subordinación jerárquica en supra ordenación de los

reglamentos estatales a subordinación de los reglamentos municipales respecto de las cuestiones reservadas a los municipios, contrariamente a lo señalado por la demandante.

Lo anterior es de importancia además en función de que contiene un precepto de contenido similar al numeral 401 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza invocado por el actor, esto es, el numeral 217, primer párrafo, del reglamento en cita, que dispone:

<<Artículo 217. En todos aquellos casos en que el infractor sea jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de un día de su jornal o salario, debiendo demostrar tal carácter ante el Juez Calificador en el momento de la aplicación de la sanción y en caso de no hacerlo, se hará acreedor a la sanción estipulada para la infracción cometida o, en su caso, se conmutará por arresto de hasta 36 horas.>>

Sobre esta problemática, es conveniente recordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 171/2019 tuvo la intención de no permitir que la decisión jurisdiccional tomada constituyera un incentivo para eludir la sanción aplicable para aquellas personas que incurrían en la infracción de conducir un vehículo automotor en estado de ebriedad, así, es dable afirmar que la interpretación que se brinde al precepto legal no debe constituir un aliciente para que los particulares perpetúen la conducta infractora o reincidan en ella bajo el argumento de que por el solo hecho de ser trabajadores la sanción pecuniaria no puede sobrepasar un día de salario de trabajo, pues la medida tomada por el legislador local es tendiente a no causar un perjuicio en la unidad familiar del infractor en aquellos casos en que sus condiciones económicas sean precarias, o perciban cantidades mínimas suficientes

únicamente para la subsistencia diaria y satisfacción de las necesidades primarias del infractor y de su familia, encontrándose en un estado de vulnerabilidad económica.

En ese sentido, si bien el consumo de bebidas alcohólicas no constituye en todos los casos la compra de un artículo “de lujo”, si representa que la infractora cuenta con un poder adquisitivo que le permite la compra de productos que no forman parte de la canasta básica.

Debe tenerse en cuenta además que la parte actora en su escrito de demanda, en el hecho tercero manifestó que un familiar suyo acudió y realizó el pago de la multa, de donde se verifica que su unidad familiar disponía del numerario suficiente para hacer el pago de la infracción.

Ahora bien, en caso de que estimara que no se encontraba en la posibilidad de cubrir el monto de la sanción económica, la accionante estaba en aptitud de cumplir la sanción mediante el arresto administrativo, pues la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, determinó que el arresto y el pago de la multa eran conmutables, de donde se colige que fue la propia impetrante quien optó por el pago de la multa en lugar del arresto administrativo.

Con independencia de lo anterior, debe decirse que la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, se limitó a aplicar las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, inclusive señalando el monto mínimo legal previsto, de donde se destaca que el monto mínimo y máximo no son señalados

por las autoridades administrativas, sino que éstas únicamente se encuentran facultadas para obrar dentro de los márgenes precisados por el legislador local, como sucedió en la especie.

Por último, no pasa inadvertido que la actora refiere en el hecho segundo que el Juez Calificador firmó la boleta de detención(sic), lo que considera indebido toda vez que el Juez no estuvo presente al momento en que se efectuó la misma.

La impetrante parte de una premisa falsa puesto que, la Juez Calificador firmó el ya referido Informe Policial Homologado, haciéndolo en el "Apartado 1.3 Datos de quien recibe la puesta a disposición", es decir, se verifica que no participó de la detención, sino que su firma es en función de que la persona detenida fue puesta a su disposición para la calificación y sanción de la falta administrativa imputada a la entonces presunta infractora.

Siendo que su intervención en la calificación de la sanción administrativa es posterior a la detención, como se constata del artículo 67, párrafos tercero, cuarto y quinto, del Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que dispone:

<<Artículo 67. (...)

*En todos los casos que **se detecte a una persona que conduce de manera irregular, el agente adscrito a la Dirección le marcará el alto** para determinar el motivo por el cual se observa una conducción irregular. Si al infractor se le detecta aliento alcohólico, **el Agente podrá presentar al conductor ante el médico dictaminador** para que compruebe el grado de alcohol, para efectos de establecer la sanción a aplicar, quien a su vez deberá de expedir el dictamen médico por escrito, asentando su nombre, firma y número de cédula profesional. Si al*

aplicar el alcoholímetro este no rebasa 0.09 grados de alcohol por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de medición, se considerará como aliento alcohólico y sólo se realizará una amonestación.

En el supuesto de que al conductor se le detecte algún otro síntoma de intoxicación o bajo el influjo de drogas o enervantes no relacionado con las bebidas alcohólicas se seguirá el procedimiento anterior.

*Una vez **comprobado el estado de ebriedad o la ineptitud para conducir**, se procederá al retiro de circulación del vehículo con el uso de grúa y remitido al corralón oficial y **el conductor será canalizado al Juez Calificador para que, en su caso, se realice el procedimiento correspondiente.**>> (Énfasis añadido)*

En suma de lo hasta aquí expuesto, se concluye que los argumentos vertidos en el único concepto de anulación esgrimido por la parte actora resultaron en parte infundados y en parte inoperantes, por lo que, con fundamento en el artículo 87, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, **se reconoce la validez del acto impugnado** consistente en la sanción impuesta por la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, en el acta de Calificación de Falta Administrativa de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, y como consecuencia, del pago amparado en el recibo oficial con número de folio ***** emitido por la Tesorería Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

P R U E B A S

Hecho lo anterior, **se procede a la valoración de las pruebas** ofrecidas de la intención de la parte actora, a quien se le tuvieron por admitidas las siguientes:

La documental, consistente en original de recibo de pago número de folio ***** emitido por la Tesorería

Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, misma que fue ampliamente analizada en la presente determinación, y que goza de plena eficacia demostrativa en términos del artículo 78, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

A la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, le fueron admitidas, y se tuvieron por desahogadas, las siguientes pruebas:

La documental, consistente en copia cotejada de resultado de alcoholímetro.

La documental, consistente en copia cotejada de dictámenes de integridad física.

La documental, consistente en copia cotejada de boleta de ingreso

La documental, consistente en copia cotejada de informe policial homologado.

La documental, consistente en copia cotejada de calificación de falta administrativa.

Documentos anteriores con pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 78, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismas que no fueron objetadas por la parte actora ante su omisión de producir ampliación a la demanda, mismas que fueron ampliamente valoradas en la presente sentencia, a lo que se remite en obvio de repeticiones innecesarias.

Además, le fue admitida **la documental**, consistente en copia cotejada de boleta de salida, instrumento que no fue controvertido por la pleiteante, y con la cual se robustece que no se materializó la sanción de arresto, sino que la propia ciudadana ***** optó por realizar el pago de la sanción pecuniaria conmutando así el arresto por la multa.

Al **Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, le fue admitida la documental consistente en copia certificada del recibo de pago oficial con número de folio ***** , siendo innecesario reiterar la valoración realizada de dicho documento en obvio de repeticiones.

Al **Director de la Policía de Saltillo, Coahuila**, le fueron admitidas y se tuvieron por desahogadas, las siguientes pruebas:

La documental, consistente en copia certificada de tarjeta informativa de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la cual reviste pleno valor probatorio en términos del artículo 78, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que hubiese sido controvertida por la parte actora al no producir ampliación a la demanda, con la cual se robustece que el la detención efectuada por la elemento perteneciente al cuerpo de seguridad pública únicamente fue un acto de molestia al cual no le son exigibles los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, pues ésta se limitó a detener a la presunta infractora para remitirá al Juez Calificador en turno, previa

comprobación de la probable comisión de una falta administrativa.

La documental, consistente en copia certificada de la boleta de ingreso al Juez Calificador, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, a la que le son aplicables las mismas consideraciones que la probanza que antecede.

La documental, consistente en copia simple de dictamen de integridad física suscrito por la ciudadana *********, al que se agrega copia de ticket emitido por el aparato para la medición de alcohol en el aliento, mismos que fueron valorados en el cuerpo de la presente sentencia, siendo innecesario reiterar las consideraciones ya plasmadas.

La instrumental de actuaciones, cuya valoración se encuentra inmersa en el estudio del diverso material probatorio aportado por las partes, sin que su falta de valoración expresa cause agravio a dicha oferente¹³.

Por su parte, debe recordarse que a la **Coordinación de Jueces Calificadores de la Secretaría del Republicano**

¹³ Época: Octava Época, Registro: 224835, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Materia(s): Laboral, Tesis: VII. 1o. J/9, Página: 396. **PRUEBAS, OMISION DE ANALISIS DE LAS PRUEBAS PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Carece de trascendencia jurídica que la junta no analice expresamente las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, si el estudio de las mismas se encuentra implícito en el que se hizo de las demás consideradas en el laudo combatido.

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. **PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.** Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.

Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se le tuvo por no ofreciendo pruebas en virtud de no haber prestado contestación a la demanda; sin embargo, es oportuno mencionar que la presunción de certeza de los hechos derivado de su contumacia se ve destruida con el material probatorio exhibido por el resto de las partes, al construir prueba en contrario al sentido de dicha presunción.

Conclusión

Al haber resultado **en parte infundados, y en parte inoperantes, los conceptos de anulación** hechos valer por *********, habiéndose suplido las deficiencias detectadas, en términos del artículo 84 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se procede a **confirmar la validez del acto administrativo impugnado**, esto es, de la sanción impuesta por la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila**, en el acta de Calificación de Falta Administrativa de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, y como consecuencia, del pago amparado en el recibo oficial con número de folio ********* emitido por la Tesorería Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

Por lo expuesto y fundado y con sustento en los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, y 87 fracción I de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se **reconoce la validez del acto administrativo impugnado**, esto es, de la sanción impuesta por la **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de**

Saltillo, Coahuila, en el acta de Calificación de Falta Administrativa de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, y como consecuencia, del pago amparado en el recibo oficial con número de folio ***** emitido por la Tesorería Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 25, 26 fracción III, 27, fracción I, 29 y 30 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza **notifíquese personalmente** esta sentencia a la parte actora *****; y **mediante oficio** a la 1) **Juez Calificador del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, al 2) **Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila**, así como al **Director de la Policía de Saltillo, Coahuila**, en los domicilios respectivamente señalados en autos; además, notifíquese **por lista** a la **Coordinación de Jueces Calificadores de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza**.

Notifíquese. Por los motivos y fundamentos jurídicos plasmados en el cuerpo de la presente sentencia, resolvió la Licenciada Sandra Luz Miranda Chuey, Magistrada de la Primera Sala en Materia Fiscal y Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, residente en esta ciudad, quien firma junto con el Licenciado Luis Alfonso Puentes Montes, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la mencionada Sala Unitaria, quien autoriza con su firma y da fe. -----

**Magistrada de la Primera Sala
Unitaria en Materia Fiscal y
Administrativa**

**Secretario de Estudio y
Cuenta**

**Licenciada Sandra Luz
Miranda Chuey**

**Licenciado Luis Alfonso
Puentes Montes**



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Se lista la sentencia. Conste. -----

(Hoja de firmas perteneciente a la sentencia definitiva dictada dentro de los autos del Juicio Contencioso Administrativo FA/219/2022.)



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA